



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dos (02) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante : ALBEIRO DE JESÚS CÓRDOBA GAVIRIA
Demandado : DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Radicado : 05001 31 05 019 2021 00027 01
Sentencia : S-047

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín el día 15 de febrero de 2022.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

ALBEIRO DE JESÚS CÓRDOBA GAVIRIA llamó a juicio al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, para que una vez se declare que es beneficiario de la Convención Colectiva suscrita entre la demandada y la Organización Sindical SINTRADEPARTAMENTO, sea condenada al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional desde el momento en que cumplió los requisitos legales, junto con los

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación de las condenas y las costas del proceso.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 18 de marzo de 1965, por lo que cumplió los 50 años de edad el mismo día y mes del año 2015; que está vinculado al servicio de la "*GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA*" desde el 4 de septiembre de 1987 en calidad de trabajador oficial; que cumplió 20 años de servicio desde el 4 de septiembre de 2007; que se encuentra afiliado a la Organización Sindical SINTRADEPARTAMENTO desde el 25 de enero de 1988; que la Convención Colectiva suscrita el 9 de diciembre de 1970, la cual se encuentra vigente, establece el derecho a la pensión de jubilación a los trabajadores que cumplan 20 años de servicios y 50 de edad; y que su solicitud de pensión fue negada por la entidad demandada mediante Resolución 2020060023579 del 13 de mayo de 2020.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que existen normas de carácter constitucional que dejaron sin vigencia convenciones colectivas que consagraban condiciones pensionales más favorables a las que rigen actualmente. Con respecto a los hechos, acepta la fecha de nacimiento del demandante, su vinculación a la entidad y todo lo relacionado con la solicitud de pensión de jubilación y la decisión negativa que se adoptó, advirtiendo que los 50 años de edad fueron cumplidos apenas el 18 de marzo de 2015, mientras que la convención colectiva pudo ser aplicada hasta el 31 de julio de 2010. Como excepciones de mérito propuso imposibilidad jurídica de reconocer y pagar pensión de jubilación convencional, inexistencia de obligación, falta de causa para pedir y petición antes de tiempo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 15 de febrero de 2022, el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ al DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA al reconocimiento y pago a favor del demandante, de la pensión de jubilación convencional establecida en el artículo 96 de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita con SINTRADEPARTAMENTO a partir del momento de su desvinculación laboral, la cual deberá ser cuantificada con el 80% del promedio mensual de lo percibido en el último año de servicios. Ordenó además el pago de las costas del proceso, cuyas agencias en derecho fueron fijadas en la suma de \$2´000.000.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la decisión, la apoderada del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA presentó recurso de apelación a través del cual insiste en que en el presente caso no se dan las condiciones para haber adquirido la pensión convencional. Sostiene que para la fecha en que comienza a regir el acto legislativo y hasta la cual estuvieron vigentes las disposiciones en materia pensional que se encontraban en las convenciones colectivas al 31 de julio de 2010, el demandante no cumplía con los requisitos para acceder a dicha prestación periódica y no había adquirido el derecho que reclama, por lo que no es posible reconocer pensión con base en la excepción propuesta en la norma cuando señala que se respetaran los derechos adquiridos; en esa fecha el demandante no había cumplido con el requisito de edad exigido para acceder a la pensión consagrada en la norma referida.

Al demandante no se le están violando los derechos fundamentales de asociación sindical, de negociación colectiva y a la seguridad social; el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ha limitado su actuación al cumplimiento de los postulados constitucionales y legales, las consecuencias que de ellos se deriven no pueden ser interpretadas como una violación a los derechos del demandante.

De la normatividad constitucional es claro que los trabajadores oficiales que se encuentran amparados por los beneficios pensionales determinados en una convención colectiva de trabajo suscrita con anterioridad a la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, solo podrán disfrutar de los privilegios allí establecidos mientras la convección esté vigente y si son suscritas con posterioridad a su entrada en vigor no podrán incluir condiciones pensionales más favorables que las señaladas en las normas vigentes del Sistema General de Pensiones. Por el acto legislativo 01 de 2005, las normas de carácter pensional que regían a la fecha de su vigencia contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajos, laudos o acuerdos válidamente celebrados, las que suscribieron en su vigencia dentro del 31 de julio de 2010, perdieron su vigencia en esta fecha, como consecuencia de esto la administración departamental solo puede reconocer pensiones con fundamento en las normas de carácter convencional a los trabajadores oficiales que causaron el derecho hasta ese momento.

En el caso en concreto, se cumplen los requisitos para la pensión el 16 de marzo de 2015, fecha para la cual ya habían perdido la vigencia las normas pensionales de carácter convencional por virtud de lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005 y lo dicho en las sentencias 30077 del 23 de enero de 2009, 39797 de 2012, 43851 de marzo de 2012, 45402 del 14 de febrero de 2012, 34822 de 24 de enero de 2012, 40094 del 24 de enero de 2012, 42994 del 20 de febrero de 2013 y 42210 del 11 de septiembre de 2013, lo que también es acogido por la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado en el concepto radicado 110010306000201001022038 del 26 de noviembre del 2010.

De conformidad con lo mencionado, el señor ALBEIRO DE JESÚS CÓRDOBA GAVIRIA no cuenta con un derecho adquirido, ni con una expectativa legítima, en la medida que para el 31 de julio de 2010 tenía 45 años y 4 meses de edad. Reunió los 2 requisitos

convencionales el 16 de marzo de 2015 y la cláusula relacionada con la prestación pensional se encontraba sin vigencia en virtud de los efectos derogatorios del acto legislativo de 2005.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término legalmente concedido las partes no realizaron pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES:

Según viene de verse, el señor ALBEIRO DE JESÚS CÓRDOBA GAVIRIA pretende el reconocimiento de la pensión de jubilación Convencional contenida en el artículo 96 de la Convención Colectiva suscrita entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y SINTRADEPARTAMENTO, por el hecho de llevar laborando en esa entidad más de 20 años y haber cumplido la edad de 50 años.

Antes de cualquier consideración en torno al tema planteado, es preciso advertir la existencia de una serie de hechos que no son materia de discusión a esta altura del proceso:

- i) El demandante nació el 18 de marzo de 1965, lo que significa que cumplió los 50 años de edad el mismo día y mes del año 2015;
- ii) Se encuentra vinculado al servicio de la demandada desde el 4 de septiembre de 1987 como trabajador oficial, es decir, desde hace más de 35 años;
- iii) El 16 de marzo de 2019 el actor solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación convencional, con respuesta negativa según resoluciones 60023579 del 13 de mayo de 2020, 60107841 del 6 de agosto de 2020 y 60114275 del 22 de octubre, también de 2020, en todas ellas con fundamento en el Acto Legislativo 01 de 2005.

Para resolver lo situación planteada, debe partirse de la base indiscutible de la existencia de la Convención Colectiva suscrita entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y la Organización Sindical SINTRADEPARTAMENTO. En su texto inicial, que corresponde al que se firmó el 9 de diciembre de 1970 y que fue transcrito en el artículo 96 del texto denominado *“Recopilación de normas convencionales y Laudos arbitrales vigentes 1945 – 2002”*, se puede apreciar que la pensión que se pretende está regulada en la cláusula décimo segunda en los siguientes términos: *“PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El Gobierno Departamental continuará reconociendo la pensión de jubilación a todos sus trabajadores, al cumplir veinte (20) años de trabajo y cincuenta (50) años de edad.”*

El principal argumento defensivo del ente departamental demandado, consiste en que el demandante carece del derecho a la pensión reclamada debido a que el requisito de los 50 años de edad fue adquirido con posterioridad al límite temporal establecido a través del Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, el 18 de marzo de 2015.

Así lo dio a entender al resolverle la reclamación administrativa, lo cual es ampliado al contestar la demanda y recalcado en la sustentación del recurso de apelación, señalando que la fecha máxima de vigencia de los beneficios convencionales que se reclaman fue hasta el 31 de julio de 2010.

En esas condiciones, lo primero que se debe establecer es si a pesar de que el trabajador cumplió 20 años en la Compañía desde el mes de septiembre de 2007, pero sin cumplir los 50 años de edad, los cuales viene a reunir apenas el 18 de marzo de 2015, es o no factible considerarlo aún beneficiario de tal prerrogativa, es decir, si tal requisito debe entenderse como propio de la causación del derecho, o lo es de su exigibilidad.

En materia de pensiones extralegales, bien que provengan de la convención colectiva o del pacto colectivo, o de otro instrumento

jurídico diferente de la ley, debe estarse a lo que al respecto dispongan los acuerdos correspondientes, de manera específica, pues no es posible establecer, por vía general y abstracta, los diversos alcances que emanen de los derechos consagrados en aquellas. Así lo ha adocinado insistentemente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto ha considerado tal libertad interpretativa siempre que no se distorsione en materia grave el contenido del precepto extralegal.

En el presente caso, es posible entender que el cumplimiento de la edad se configura como condición futura de exigibilidad de la prestación siempre que el servidor haya cumplido el tiempo mínimo de servicios requerido. Vale decir, el arribo, futuro y de suyo eventual, a una edad preestablecida, en este caso 50 años como expectativa sujeta a condición, esto es, que puede suceder o no, es un requisito de la exigibilidad de la prestación más no de su causación, que se da cuando el trabajador ha completado un tiempo de servicio de 20 años de labores.

Desde luego que para acceder al derecho pensional se requiere la reunión de ambos elementos - edad y tiempo de servicios - pero éste último es indispensable haberlo cumplido antes de la derogatoria de las normas convencionales según el contenido del Acto Legislativo 01 de 2005, dejando así afianzado el derecho a la pensión; no así el de la edad que solo será necesario para el goce efectivo de la prestación, esto es, de la exigibilidad de la misma.

Al respecto, lo primero que se debe advertir, es que el parágrafo transitorio tercero del Acto Legislativo 01 de 2005, estableció la fecha a partir de la cual expirarían todos los regímenes pensionales especiales en los siguientes términos: *"Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término*

inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010".

En esta línea, es preciso hacer referencia a la doctrina jurídica de la Corte Constitucional desarrollada en sentencias como la **SU 267 de 2019** a través de la cual se hace un completo análisis de un caso adelantado precisamente en contra del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en la que se ocupó de analizar de manera principal la aplicación del principio de favorabilidad en la interpretación de normas convencionales indicando lo siguiente:

"... en las sentencias SU-241 de 2015 y SU-113 de 2018, la Corte abordó casos con similares situaciones fácticas y jurídicas al presente asunto. En dichas oportunidades, se indicó que las convenciones colectivas son auténticas fuentes de Derecho y no pueden ser consideradas simplemente como elementos probatorios. En consecuencia, su interpretación debe ceñirse a los principios constitucionales, entre los cuales se destacan favorabilidad e in dubio pro operario (artículo 53 Superior).

Bajo este razonamiento, la Corte ha indicado que estos principios deben ser aplicados por el juez laboral ante la existencia de dudas interpretativas relacionadas con convenciones colectivas, más aún, al tratarse de derechos pensionales en disputa.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra en el presente caso que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos: (i) sustantivo, al proferir una decisión realizando una errónea hermenéutica jurídica al asumir que las convenciones colectivas tenían un sentido unívoco en perjuicio del trabajador; y, (ii) desconocimiento del precedente, debido a que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, falló en contra de los lineamientos fijados en la sentencia SU-241 de 2015."

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por su parte y particularmente en lo relacionada con el análisis de la edad como requisito de exigibilidad y no de causación del derecho, se ha pronunciado en diversas sentencias en las que se han analizado textos convencionales con otras empresas o entidades, pero con una redacción similar a la que contiene la Convención Colectiva suscrita con el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, por lo cual pueden aplicarse de manera transversal al caso sub júdice:

1. En la SL 3343 del 26 de agosto de 2020, en la que se hace referencia a la Convención Colectiva suscrita en el entonces INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se dijo que:

“Así las cosas, y como quiera que en diferentes providencias esta Sala ha comprendido en forma disímil el contenido del citado artículo 98 convencional, se precisa que, a partir de esta decisión, la interpretación válida de dicha cláusula es la que aquí se fija, esto es, que el requisito de edad en ella contenido es de exigibilidad de la prestación pensional, no de causación.

Por tanto, se equivocó el sentenciador colegiado al determinar que la edad era un requisito para causar la prestación, a pesar de tratarse de un requerimiento necesario únicamente para su exigibilidad. “

2. En otro grupo de sentencias, relacionadas con la CAJA AGRARIA, como la SL 5178 del 25 de noviembre de 2020, citando lo que previamente se había dicho en la SL 526 de 2018, señaló:

“... la Sala se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre la interpretación y alcance de la normativa transcrita y, en particular, respecto al primer párrafo allí estipulado. Precisamente, en la sentencia CSJ SL526-2018 señaló que: (i) aplica a ex trabajadores de la disuelta y liquidada Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, esto es, a quienes a partir de la vigencia de la convención colectiva de trabajo perdieron su condición de activos; (ii) que para la estructuración del derecho pensional se exige prestar, cuando

menos, veinte 20 años de servicio a la citada empresa, y (iii) que el disfrute o goce de la prestación se produce cuando se arriba a la edad de 50 años, si es mujer o 55 si es hombre.

(...)

Dado que el derecho pensional reclamado quedó causado o adquirido con antelación a la expedición del Acto Legislativo 01 de 2005, es claro que esta reforma no tiene incidencia alguna en la garantía del derecho.

En efecto, si bien el extrabajador cumplió la edad con posterioridad al 31 de julio de 2010, cuando por virtud de aquella modificación superior perdieron vigencia, en principio, las reglas de carácter pensional que regían en pactos, convenciones, laudos o acuerdos válidamente celebrados, entre ellos el que aquí se analiza, tal hecho no compromete el derecho pensional; se reitera que este se adquirió desde 1999 y solo quedó pendiente de alcanzar la edad requerida para su disfrute."

De esa misma entidad, en la SL 4232 del 26 de octubre de 2022 y la SL 527 del 16 de febrero de 2022, también se advirtió que "esta Sala, ha señalado que la pérdida de vigencia de las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones, pactos y acuerdo, no comporta la pérdida de los derechos válidamente adquiridos mientras esas reglas estuvieron en vigor, hipótesis plenamente aplicable al presente caso, si se tiene en cuenta que conforme a lo expuesto en la doctrina relacionada en párrafo anterior, la edad constituía únicamente un requisito para la exigibilidad de la pensión."

Además, en la sentencia SL 4049 del 27 de septiembre de 2022 se concluyó lo siguiente respecto del caso que se estudiaba:

"... trasladando los anteriores argumentos fácticos y jurídicos al asunto bajo escrutinio y al ser cristalino que el señor Edgar Salazar Perdomo (i) laboró al servicio de la Caja Agraria durante el periodo comprendido entre el 10 de noviembre de 1977 al 27 de junio de 1999, (ii) acreditó el requisito de tiempo de servicios, más de 21 años, y para la data de su

desvinculación, dejó causado el derecho, y (iii) la edad simplemente es un elemento de exigibilidad, lo que en su caso ocurrió el 10 de noviembre de 2012, cuando arribó a los 55 años; de manera que, el hoy accionado **ya contaba con un derecho adquirido**, por lo que, no se encuentra afectado por el Parágrafo Transitorio 3º del Acto Legislativo 01 de 2005."

3. Analizando un caso ocurrido con un extrabajador del extinto INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO – IDEMA, se indicó:

"... en cuanto al reparo jurídico, en punto a que conforme al Acto Legislativo 01 de 2005, el actor no es acreedor a la prerrogativa del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, ya que la edad de 50 años la cumplió el «28 de febrero de 2017», cuando la norma convencional ya había perdido vigencia, basta con precisar que tal cuestionamiento resulta inane en este caso particular y concreto, en tanto el derecho a la prestación económica se causó antes de la vigencia del referido acto legislativo, tal y como se ha precisado insistentemente por esta Corporación en casos similares al que es objeto de estudio."

4. No ocurre lo mismo con otras sentencias como la SL 660 del 17 de febrero de 2021, en tanto el texto convencional allí analizado, relacionado con el BANCO DE LA REPÚBLICA, contenía una redacción que no ofrecía duda alguna en cuanto a su interpretación y a la necesidad para sus trabajadores de acreditar tanto el tiempo de servicios como la edad en vigencia del vínculo. En este caso, para la Corte no quedó duda de lo anterior, expresado en los siguientes términos:

"Del texto transcrito se tiene que los trabajadores del Banco de la República que se retiren con posterioridad a la fecha señalada, con el anhelo de disfrutar de la pensión de jubilación con los **«requisitos legales»** de «mínimo» 20 años de servicio y la edad «mínima» de 50 años de edad si son mujeres o 55 años de edad si son hombres, tienen derecho a que su prestación se liquide de acuerdo a las tasas de remplazo que allí se incorporan, porcentajes que se incrementan únicamente en razón al tiempo laborado. (Negritas propias)

Refulge de la norma convencional trascrita, sin lugar a duda, la necesidad de confluir tanto tiempo de servicios y edad para que el trabajador sea acreedor de la pensión convencional, pues, al hacer la norma referencia a contarse con el acatamiento de los «requisitos legales» es obvio que se trata de la reunión de la edad con el tiempo de servicios. Resulta de tanta trascendencia el cumplimiento de la edad para causar la pensión que, el tiempo de servicios, conforme a la tabla anexa, luego de satisfacerse su requerimiento mínimo, viene a ser un factor de incremento de la tasa de reemplazo a ser tomada en cuenta en la liquidación del derecho."

En conclusión, como sea que existe una interpretación que resulta más favorable a los intereses del trabajador, en virtud de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación que se ha citado, así como bajo el respaldo de las tesis que ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en este caso resulta posible admitir, según el texto en que se fundamenta la petición, que la edad es un requisito de exigibilidad del derecho y no de su causación.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser confirmada, incluyendo con ello la orden de reconocer la prestación luego de la desvinculación del trabajador a la entidad, así como lo relacionado con el monto de la prestación, el cual está acorde con lo que dispone el texto convencional que se invoca.

Costas en esta instancia en contra de la entidad accionada por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Medellín el día 15 de febrero de 2022.

Costas en esta instancia en contra de la entidad accionada por haber sido vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d4db087a9024d71010fc4380cad49be19685eab60add89d4a14dc6fd473312e5**

Documento generado en 02/03/2023 03:11:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>